

SEGUNDA SECCIÓN
SALUD, SEXUALIDAD Y RETOS FRENTE A LA VIOLENCIA

LOS JÓVENES Y LA VIOLENCIA EN MÉXICO

POST SCRIPTUM*

HIPÓLITO RODRÍGUEZ**

Consideramos que el principal reto en los próximos años consiste en eliminar las condiciones que han hecho posible el crecimiento de los homicidios de jóvenes en nuestro país. Estimamos que esa situación obedece a un complejo entramado socioeconómico. Por un lado, la escasez de oportunidades laborales, educativas y habitacionales (el derecho a la ciudad) y, por otro, una diversidad de procesos económicos y políticos, han creado las condiciones para que las violencias hacia las juventudes no hayan cesado. La desigualdad en el acceso a las oportunidades de inserción social no tiene el mismo peso en todo el territorio nacional. Hay regiones, entidades federativas, zonas urbanas, donde esta desigualdad incide con mayor fuerza, haciendo mella en los estratos juveniles; pero también es cierto que la violencia se ha cernido particularmente en zonas donde el tráfico de drogas ha sido más intenso. El asesinato de miles de jóvenes constituye el mayor trastorno que hayamos vivido en las últimas décadas. Son muchas las regiones donde la presencia de las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos da testimonio de un dolor que aflige a buena parte de las familias mexicanas. La impotencia del Estado para poner fin a este infierno es cuestionable. Pero, ¿es el Estado el único responsable de este proceso de creciente inseguridad? Apuntamos aquí algunos elementos de análisis.

A punto de culminar el primer cuarto del siglo XXI, la situación económica y social de las juventudes en México sigue estando dominada por rasgos de pobreza y vulnerabilidad. En 2018, señalamos que la economía

* Post scriptum al capítulo “Los jóvenes en un nuevo proyecto de nación” (Rodríguez, 2018).

** Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social.

del capitalismo tardío nos estaba llevando a una situación que creíamos superada: *una economía política de la inseguridad*. De hecho, en el curso de los últimos años, el escenario apenas comienza a cambiar. A pesar de los esfuerzos hechos desde el Estado para abatir el llamado *outsourcing* e incrementar el salario mínimo, el signo de la flexibilización neoliberal sigue afectando las oportunidades laborales de los trabajadores jóvenes, quienes continúan observando cómo se deterioran las posibilidades de obtener un empleo *decente*.

Según datos de la ENOE, al cuarto trimestre de 2018, las personas entre 18 y 29 años sumaban 24.2 millones, representando el 19.3% de la población total de México. En esa fecha, el número de jóvenes de 18 a 29 años ocupados era de poco más de 14 millones. A pesar de representar poco más de una cuarta parte (26.6%) de la PEA, muchos jóvenes padecen una estructura de oportunidades desigual: sus opciones son mal remuneradas, precarias y sin alternativas de movilidad.

La tasa de desempleo de jóvenes (de 18 a 29 años) siempre ha estado por encima de la tasa nacional; en el cuarto trimestre de 2018 esta tasa se ubicó en 5.95%, mientras que la nacional fue de 3.26%. También, dentro de la población desocupada, se encuentran 887 mil personas entre 18 y 29 años, que representan cerca de la mitad del total (48.5%). Aunque los datos del año 2024 se organizan de otra manera, se advierte que la población de 15 a 24 años que se halla desocupada equivale al 32.4% de ese conjunto (1.7 millones), lo que equivale a 560 mil personas.

La pobreza que enfrentan los jóvenes provenientes de los estratos más bajos los orilla a aceptar cualquier tipo de ocupación. Por ello, los estudios señalan que en México no hay casi desempleo: los jóvenes no se pueden quedar con los brazos cruzados, y asumen cargas de trabajo eventuales, generalmente en el sector informal: “se observa un mercado de trabajo con muy bajo desempleo que se combina con una altísima informalidad, una importante desigualdad en la distribución de ingresos y con un nivel de productividad intermedia. Presentan ambos, PIB per cápita e IDH más bajos del estudio, a la vez que la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes más alta” (Assusa, 2019: 104). Este autor cuestiona entonces la percepción construida de los *ninis*: es una forma de estigma, una construcción social para excluir aun más a la juventud que ya padece una segregación producida por una estructura económica, un mercado de trabajo que no ofrece oportunidades de inserción e inhabilita a las comunidades para dar espacios de aportación a jóvenes que poseen energía y talento. Por ello, añade, es vital señalar hasta qué punto la categoría de jóvenes *nini* resulta útil para que diversos tipos de agentes sociales construyan *alteridades*

generacionales y de clase sobre las que pesan los peores disvalores morales de las sociedades occidentales contemporáneas: la vagancia, la improductividad, la falta de autonomía y la violencia.

A lo largo de los años, la informalidad predomina en este segmento. El empleo en condiciones de informalidad es menos remunerativo que en las de formalidad; así, es notable el contraste en el rango salarial de los ocupados que perciben hasta un salario mínimo: el 32.5% de los jóvenes ocupados de 15 a 29 años en condición de informalidad se encuentran en ese estrato salarial, a comparación del 4.1% que disponen de un empleo formal. Los efectos del trabajo en la informalidad son graves y duraderos. En el corto plazo incluyen bajos salarios, falta de cobertura de seguridad social e inestabilidad laboral. En el largo plazo, un empleo en la informalidad durante la juventud tiene impactos negativos a lo largo de la trayectoria laboral, pues es altamente probable permanecer en esa condición una vez que se ha ingresado a ella.

Ante un escenario de escasas oportunidades laborales y educativas, el gobierno de la 4T impulsó un programa –Jóvenes Construyendo el Futuro– para apoyar a ese segmento. En México, al cuarto trimestre de 2018, el número de jóvenes que no estudian y no trabajan sumaba 5.7 millones (82.8% son mujeres y 17.2% hombres). En el 2019, el programa benefició a 1,120,543 jóvenes y para 2020 a 444,585 nuevos beneficiarios, lo que representó, al cierre de 2020, un total de 1,565,128 beneficiarios (cfr. <https://jovenesconstruyendoelfuturo>). En 2024, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el programa ha llegado ya a 2,855,387 jóvenes beneficiados (58% de las personas beneficiarias son mujeres y 42% hombres) y la inversión en el programa alcanzaría los 24,204 millones de pesos. De acuerdo con las cifras oficiales, esta política pública ha contribuido a que 6 de cada 10 jóvenes que han participado en el programa puedan colocarse en un empleo o en alguna actividad productiva. El programa ofrece una beca de capacitación que dura un año, buscando que los empleadores puedan continuar dando ocupación a los jóvenes que recibieron la misma. Tal vez sea demasiado pronto para evaluar los efectos de esta iniciativa en las opciones de movilidad y en la estructura de oportunidades. Pero es necesario reconocer que las actividades ilegales y delictivas aún siguen ganando espacio en una economía poco dinámica como fuente de empleo y de ingresos.

El hecho es que la economía del siglo XXI no ha sido particularmente positiva para que se produzca una amplia inserción laboral y educativa de los estratos juveniles. En las primeras dos décadas, la “guerra criminal” se cobró alrededor de un cuarto de millón de vidas. De 2016 a 2021,

considerando sólo a personas menores de 29 años, se registraron 74 mil víctimas de homicidio. Sólo en los tres primeros años de este sexenio se contabilizaron casi 40 mil jóvenes, según datos del INEGI. Según *Animal Político*, esta estadística es la culminación de una tendencia que venía al alza desde 2017, en el priismo, cuando de 9 mil casos se pasó a 12,141, un salto del 35%. Desde ese año hasta la actualidad, la cifra de jóvenes asesinados se ha mantenido siempre por arriba de los 12 mil casos al año, un promedio de 33 al día, algo más de uno cada hora.

¿Cómo explicar esta barbaridad? La hipótesis más plausible consiste en reconocer que nos hallamos ante una guerra: una guerra civil. En realidad, de acuerdo con Schedler y De la calle (2020), no se trata de una guerra civil, sino de múltiples guerras civiles económicas donde los grupos armados luchan entre sí y contra el Estado para alcanzar objetivos monetarios. Este tipo de guerras, apuntan, han tenido en México efectos de mortalidad extraordinarios: “Para los quince primeros años del actual periodo democrático del país, las estimaciones nos hablan de alrededor de 140 mil víctimas fatales, 35 mil desapariciones forzadas, 10 mil personas desplazadas y la migración interna de centenares de miles por razones de seguridad. [...] Los dos últimos años han roto todos los registros existentes en lo que se refiere al número de asesinatos, con 35,588 víctimas de homicidios dolosos en 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Schedler y De la Calle buscan determinar los rasgos de la guerra civil económica: quienes las animan, las empresas del narcotráfico, poseen una variedad de negocios (extorsión, cobro de piso, trata de blancas, control de migrantes, secuestro, etc.). Y en esa actividad compiten con otras empresas semejantes y establecen formas de dominio sobre sus empleados, la población civil, sus clientes y proveedores: “Las empresas criminales luchan entre sí para obtener ventajas competitivas en los mercados ilícitos o lícitos, protegiendo o ampliando sus cuotas de mercado. También utilizan la violencia para imponer el cumplimiento de contratos y castigar abusos de confianza por parte de sus proveedores, empleados y clientes. El uso empresarial de la violencia, sin embargo, tiende a ser expansivo. Aparte de combatir a sus competidores, los criminales desafían regularmente al Estado y oprimen a la población civil. El uso depredador de la violencia contra civiles es una tentación perenne en la búsqueda privada de rentas” (*Ibid*: 203). Se sabe que las empresas de lo ilícito extienden su manto sobre la propia estructura del gobierno, y se cita como ejemplo el caso de Guerrero, donde se han adueñado de un tercio de las finanzas municipales: pueden llegar a controlar agencias

estatales a través del dinero (corrupción), la fuerza (coacción), o una combinación de ambas (corrupción coercitiva). Así, Ayotzinapa puso en evidencia que las autoridades municipales estaban al servicio de las empresas narcas.

La violencia, sin embargo, no se explica sólo por una economía estancada y un mercado de trabajo poco dinámico. A los procesos económicos, que sin duda juegan un papel, hay que añadir los procesos sociales y políticos. En este sentido, nos interesa recordar aquí las lecciones que se desprenden de los estudios realizados por diversos científicos sociales en el curso de estos años de guerra civil económica.

La violencia es sobre los *commons*, sobre los tejidos que pueden todavía preservar riquezas que el capitalismo del despojo se propone controlar. El caso de Michoacán es clave: debilitar no tanto al antiguo Estado como a las comunidades, las cuales impiden que el capitalismo se adueñe de los bienes comunes. La geografía del miedo emerge como fruto de una erosión, de una ruptura de los territorios donde la comunidad puede defender su seguridad. La desaparición forzada debilita a las comunidades. Según Claudio Lomnitz (2022), en los años 40-80, las policías en los ámbitos locales habían configurado una suerte de moral en su interior, una relación de complicidad ante los abusos y la corrupción entre sus integrantes. Sin embargo, los reformistas neoliberales ignoraron eso, pues no se percataron del papel que esas policías desempeñaban en la regulación económica y los incentivos que ordenaban las prácticas de la policía de cara al hampa. Si bien eran una mafia, un mundo cuasi criminal, la policía jugaba un papel clave en la regulación de la informalidad.

El narco, señaló Aguilar Camín (2015), inauguró una nueva economía. El negocio grande de la droga abrió otros negocios, ya que al debilitar al Estado inauguró nuevas esferas de acumulación. El primer campo ilegal incluyó los espacios de circulación de la droga, pero a su lado se quebraron los mecanismos de contención para hacerse de rentas mediante el robo, la prostitución, el juego, la piratería. Luego se añadirían la venta de protección, el tráfico de personas, el despojo y el secuestro. Lomnitz coincide: la transición al nuevo orden de inseguridad que emerge en la época neoliberal se hizo posible porque el crimen encontró en el narco un medio de acumulación originaria y de ahí derivó capitales para ingresar a otras áreas de la economía: la tala de bosques, la pesca ilegal, la minería, la trata, el tráfico de migrantes. La crisis de la agricultura que se produjo con la economía neoliberal alimentó el proceso. Ofreció mano de obra barata, tierra y capitales para actividades ilegales. El dinero con estos orígenes alimentó una nueva asimetría social que desquició los sistemas de reciprocidades

que antes regulaban la vida social en algunas regiones y ciudades. Este fenómeno coincidió con la transición democrática y con la crisis de la economía neoliberal: la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad se incrementó por todos lados, los políticos locales y sus cuerpos de seguridad dependían ahora de los jefes de la economía informal ilegal. La situación derivó hacia la apertura de otros negocios: cobro de piso, robo carretero, inversiones en obras públicas, robo de recursos públicos, violación de normas ambientales. El narco se diversificó y consiguió penetrar otros ámbitos de las economías regionales.

Lomnitz contribuye a esclarecer las observaciones de Rossana Reguillo (2021): al crimen organizado le interesa aumentar el consumo local de drogas por varias razones. Porque tiene sobreproducción, y porque requiere, para vender protección, generar zozobra, miedo, lo cual le confiere valor a esa protección en el ámbito local: al expandir las adicciones, genera un ejército criminal de reserva, jóvenes adictos que están dispuestos a violar la ley a fin de conseguir su droga; se trata de una fuente de inseguridad desorganizada. De este modo se produjo una segmentación de la criminalidad, pues al lado de los grandes capos, surgieron capos medios y pequeños, rateros, pandillas y tarántulas.

No obstante, cabe preguntar sobre el crecimiento de las adicciones, sobre las condiciones de contorno: ¿por qué creció el consumo de drogas? Desde una perspectiva sistémica, es preciso entender los factores que hicieron posible un incremento de la demanda. Algunas hipótesis podrían plantear una crisis moral de la sociedad industrializada, una decadencia de los sistemas culturales, una voluntad de la clase dominante por mantener narcotizadas a sus poblaciones, una estrategia por generar nuevos mecanismos de control social, una deriva hacia una euforia alimentada por los propios medios de comunicación, una tolerancia socialmente auspiciada por la hipocresía de la burguesía. La adicción al fentanilo hace pensar en ese doble *link*: los opiáceos eran solicitados y tolerados; el producto legal incitó a un nuevo consumo ilegal.

Surge entonces un escenario donde la economía ilegal se lubrica con un mercado laboral informal: agentes fuera de los registros institucionales que colaboran, en *outsourcing*, en los procesos de control y ejercicio de la violencia. Las policías judiciales y los caciques locales solicitan sus servicios al modo en que los señores feudales ofrecían sus fuerzas de control territorial a las noblezas del antiguo régimen. De ahí viene la nebulosa del terror: la proliferación de equipos armados que negocian sus prestaciones en el ejercicio de la violencia, con el riesgo frecuente de salir de control, en función de un mercado que ofrece mejores precios para golpear a rivales del

negocio. Esta es la consecuencia neoliberal de privatizar los servicios y bienes públicos: la seguridad ha devenido parte de un mercado (legal e ilegal).

Nos hallamos entonces ante una geografía donde parecen convivir dos tendencias: en una se preservan los mecanismos de regulación del orden del antiguo régimen; y, en otra, al mismo tiempo, se busca fortalecer y modernizar los sistemas de justicia. En 2006 esta tendencia modernizadora se abandonó y se prefirió canalizar la inversión en la militarización de las policías, entregándose al olvido la reestructuración del poder judicial y de las fuerzas de seguridad municipales. Así, en lugar de reformarse el sistema de justicia, se implementó con más dureza el modelo punitivo. Esta guerra, según Lomnitz, no partió de un análisis correcto de la fuerza relativa de las economías ilícitas e informales ni de las implicaciones que podría tener una guerra para el sistema de seguridad y justicia. El gobierno no tenía ni instituciones ni recursos para una guerra así. De ese modo se empezó a prefigurar el nuevo Estado, gobernando con estados de excepción, mientras se perdía la capacidad de regular la política local y de vigilar y regular los límites y espacios de operación de las economías ilícitas. Las ínsulas de modernidad que se esperaba contagiaran al resto del país, en realidad empezaron a utilizar el mundo ilícito para su propia expansión. Así, se llega a la situación en que nos encontramos. Dice Rossana Reguillo: “Los datos a la mano cuestionan seriamente el papel de los Estados y de la sociedad a través de sus instituciones intermediarias, o intermedias, como prefiero llamar a las instituciones que serían responsables de operar entre el Estado y las y los ciudadanos, de su capacidad de contención de las violencias informes y desatadas que desestabilizan el pacto social” (2021: 76).

La anotación de Reguillo tiene sentido: el neoliberalismo desmanteló las mediaciones de gobierno, los mecanismos de contención, juzgándolos de forma homogénea como resabios (corruptos) del antiguo régimen. Sin embargo, de acuerdo con Fernando Escalante (1998), la clase política cumple con una función indispensable, de intermediación entre la sociedad y el Estado. Los ciudadanos “aparecen siempre integrados en redes, sistemas, configuraciones; de modo que la forma e incluso el sentido de su acción depende de esas tramas colectivas”. Entre el Estado y la sociedad se encuentra una red, un sistema de intermediación, cuya función específica es la reproducción del orden. Cuando una clase política entra en decadencia, cuando es incapaz de mantener el orden y regular los conflictos, se hace ostensible que son políticos inútiles, parásitos, inescrupulosos: frente a ellos se exige legalidad, es decir, Estado de derecho. Pero ya en ese año (1998), Escalante se interroga sobre el posible curso que seguirían los

procesos ante el desgaste de las clases políticas priistas: ¿se abrirían nuevos mecanismos para ampliar o renovar a la clase política?, ¿se diversificarían las redes sociales y los mecanismos para la construcción de representatividad? Desde entonces estamos ante un proceso de cambio. ¿Logrará el nuevo bloque emergente articular una nueva clase política, nuevas estructuras de contención?

Mientras tanto, es preciso ver las tendencias en curso en el resto del mundo. Los estudios disponibles señalan que la violencia posee un patrón espacial. La urbanización acelerada se exhibe como un factor asociado a la creciente violencia. En las regiones “atrasadas”, o sea, donde el ingreso monetario es bajo, la urbanización suscita inequidades al interior de las ciudades. La desigualdad es un factor clave, y el impacto de la violencia varía, por tanto, por edad y género, en cada contexto.

La violencia en el mundo es la cuarta causa de muerte en jóvenes y jóvenes adultos (15-44 años). El homicidio o la violencia interpersonal explica cerca de un tercio de todas las muertes violentas en este grupo de edad. Ocho de cada diez países más violentos en el mundo están en América Latina. A pesar de que este continente solo representa el 8% de la población mundial, 37% de los homicidios que se producen en el planeta se dan en esta región. En ella, en la primera década del siglo XXI, se registra la más alta tasa de homicidios del mundo (28.5 por cada 100 mil habitantes). América Latina experimenta una rápida y desorganizada forma de urbanización, lo que acentúa las desigualdades.

Los estudios en América Latina muestran que la creciente desigualdad de ingreso está asociada a altas tasas de homicidio, y estos ocurren con mayor frecuencia en áreas en las cuales la riqueza y la pobreza extrema se conjugan. El aislamiento ocurre en áreas con desventajas económicas, que minan las oportunidades de vida, pues los residentes carecen de nexos con los vecindarios que poseen más recursos. La desconexión con otras áreas residenciales está asociada con mayor violencia. Hay evidencia que muestra que la pobre conectividad, las dificultades topográficas, el escaso acceso a los servicios sociales, la insuficiente protección policiaca y la precariedad del Estado de derecho están asociadas al involucramiento de los jóvenes e incluso de los niños en el tráfico de drogas y armas, así como a la presencia de mecanismos alternativos de control social como pandillas, que inciden en las tasas de homicidio. El crecimiento urbano desordenado propicia la segregación, la cual agrava las desigualdades.

Según datos de 15 países de la región en 2016, la tasa de homicidios de adolescentes de 18 a 19 años fue de 46 por cada 100,000, superando con

creces el riesgo que enfrentan las personas de ese grupo de edad en otras regiones y en todo el mundo. Los hombres jóvenes de 15 a 29 años en las Américas también se ven desproporcionadamente afectados por el homicidio en comparación con sus pares en otras regiones y en todo el mundo. La tasa estimada de homicidios en 2017 para los hombres en ese grupo de edad en las Américas fue de 64 por cada 100,000.

Cuando hay cambios rápidos en las tasas de homicidios, la explicación a menudo tiene que ver con el crimen organizado. La relación entre el crimen organizado y la violencia es compleja. Hay partes del mundo con una alta prevalencia de crimen organizado, pero bajas tasas de homicidio. Los picos repentinos en las tasas de homicidio a menudo están asociados con cambios en las relaciones de poder entre los grupos del crimen organizado en competencia. Estos cambios pueden ser provocados por muchos factores, como la aparición repentina de un flujo lucrativo de contrabando, que puede causar que los grupos involucrados entren en conflicto. Esto se pudo observar recientemente en partes de Brasil, Honduras y México, donde un aumento en el flujo de cocaína provocó un aumento en las tasas de homicidios en algunas localidades, mientras que otras áreas registraron tasas de homicidio estables o en descenso.

De hecho, las altas tasas de homicidio causadas por grupos del crimen organizado pueden aumentar aún más cuando tales grupos pierden el control. Un ejemplo de este fenómeno es lo que sucedió después de la represión de los carteles mexicanos de la droga que comenzó en 2007. Para 2011, la tasa de homicidios se había triplicado, un cambio rápido que no puede explicarse por factores a largo plazo. La tasa de homicidios se estabilizó hasta 2015, cuando los carteles comenzaron a fragmentarse y diversificarse, y la tasa de homicidios comenzó a aumentar nuevamente, lo que resultó en un máximo histórico de más de 30,000 asesinatos en 2017 (UNODOC, 2019).

Al considerar estos análisis, una conclusión se desprende: no se pueden destruir los sistemas de intermediación sin esperar consecuencias nefastas. El desastre que padeció el país desde que el neoliberalismo encumbró a Salinas de Gortari no es más que el resultado de una perseverante política de erosión de la clase que cumplía una función intermediaria, despojando a la sociedad civil de las estructuras que permitían resolver las relaciones entre el Estado de derecho y las exigencias de la reproducción cotidiana de productores y consumidores, hogares y unidades económicas.

Ante la ausencia de intermediarios formales, surgen los informales, miles de redes de negociantes, muchos de ellos criminales, que procuran protección al modo de una plaga de mafias que regulan el acceso a los

mercados, las licencias de construcción, los contratos de obra pública, la salud o la seguridad. En pocas palabras, la inseguridad y la proliferación del crimen es resultado de la erosión de los arreglos locales que hacían posible el orden político en cada ámbito regional. La respuesta al desorden, impulsada por Felipe Calderón, consistió en inaugurar una guerra y llevar al ejército a la escena pública. El problema que padece hoy el país es consecuencia de esa erosión de la seguridad en lo local, en las regiones y en las ciudades. Claudio Lomnitz (2022) revela cómo el abandono de las policías municipales forma parte de este desastre. Al lado del ensayo de Fernando Escalante (2023), Lomnitz nos muestra que la seguridad se construye desde las comunidades, desde los barrios, desde abajo, con sus policías municipales, con sus arreglos territoriales y económicos cercanos, y no con fuerzas de ocupación que transitan en la superficie de las causas de tanto asesinato y tanta extorsión.

Sin embargo, ambos textos omiten el papel que juegan los factores exógenos, en particular, las políticas de nuestro poderoso vecino. Si algo da fuerza a las bandas, es el acceso a las armas. Pero de ello apenas se habla. Si algo alimenta la economía de las bandas, es el consumo de drogas y el encarecimiento de las mismas por una supuesta guerra contra ellas que no les hace mella. Pero de ello aún menos se habla. Mientras tanto, frente a ese escandaloso silencio, quienes pagan los platos rotos de las guerras económicas son las familias y sus jóvenes, víctimas de un desorden del cual no son responsables.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Camín, Héctor (2015), “La captura criminal del Estado”, *Nexos*, enero de 2015.
- Assusa, Gonzalo (2019), “Ni jóvenes, ni desempleados, ni peligrosos, ni novedosos. Una crítica sociológica del concepto de ‘jóvenes nini’ en torno de los casos de España, México y Argentina”, *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 37(1), pp. 91-111.
- Escalante, Fernando (1998), “Clientelismo y ciudadanía”, en Guillen, Diana (coord.), *Mediaciones y política*, México: Instituto Mora.
- Escalante, Fernando (2023), *México: el peso del pasado*, México: Cal y Arena.
- Lomnitz, Claudio (2022), *El tejido social rasgado*, México: ERA.
- Reguillo, Rossana (2021), *Necromáquina, cuando morir no es suficiente*, México: NED ed. e ITESO.
- Rodríguez, Hipólito (2018), “Los jóvenes en un nuevo proyecto de nación”, en Calva, José Luis (coord.), *Los jóvenes de hoy: el desarrollo como recurso*, México: Juan

Pablos Editor y Consejo Nacional de Universitarios, en: <https://www.consejonaionaldeuniversitarios.mx/los-jovenes-de-hoy-el-desarrollo-como-recursos/>
Schedler, Andreas y de la Calle, Luis (2021), “¿Borrón sin cuenta nueva? La injusticia transicional en guerras civiles económicas”, *Perfiles Latinoamericanos*, 29(57).
UNODOC (2019), *Estudio mundial sobre el homicidio*, Viena.